

Zimbabue: Las autoridades gubernamentales intensifican su campaña para silenciar a la disidencia

A medida que se acerca la fecha para la celebración de las elecciones locales en septiembre, Amnistía Internacional ve con honda preocupación que las autoridades zimbabuenses estén intensificando su acoso a las organizaciones de derechos humanos, los medios de comunicación independientes y los miembros de la judicatura.

El 29 de agosto, la doctora Frances Lovemore, directora médica de una destacada ONG de derechos humanos de Zimbabue, la Fundación Amani Trust, fue detenida en Harare. La doctora Lovemore fue acusada formalmente de «publicar o difundir declaraciones falsas perjudiciales para el Estado». Al parecer, el cargo se fundamentaba en unos reportajes publicados recientemente en la prensa en los que se aludía a la labor de la Fundación Amani Trust con las víctimas de tortura y violación sexual por motivos políticos en Zimbabue. En su edición del 25 de agosto de 2002, el periódico británico *Daily Telegraph* recogía la siguiente afirmación de la doctora Lovemore: «Los hombres de Mugabe utilizan la violación como venganza». La doctora quedó en libertad el 30 de agosto, y todos los cargos presentados contra ella fueron retirados por insuficiencia de pruebas.

«Amnistía Internacional considera que la detención de la doctora Lovemore constituye un intento de intimidar a una defensora de los derechos humanos. La comunidad internacional debe hacer cuanto esté en su mano por respaldar la labor de las ONG zimbabuenses de derechos humanos que se exponen a una situación de peligro por documentar casos de violaciones de derechos humanos y dispensar tratamiento a las víctimas».

El mismo día en que la doctora Lovemore fue detenida, el 29 de agosto en plena noche, la oficina en Harare de una de las dos organizaciones independientes de radio difusión de Zimbabue, la *Voice of the People* (VOP,), fue objeto de un ataque con bomba. No hubo heridos, aunque el edificio sufrió graves daños. Nadie se ha atribuido la responsabilidad oficial por el ataque. Pese a las restrictivas leyes reguladoras de los medios de comunicación promulgadas en 2002, la VOP ha logrado proseguir su actividad transmitiendo sus emisiones a Zimbabue desde los Países Bajos a través de onda corta.

El gobierno también ha intensificado su acoso a los miembros de la judicatura; prueba de ello son los ataques perpetrados recientemente contra distintos jueces. Según informes, el 16 de agosto de 2002 en la ciudad oriental de Chipinge, provincia de Manicaland, el juez de distrito Walter Chikwanha fue sacado a rastras de la sala donde impartía justicia, presuntamente por unos veteranos de guerra, y fue víctima de una agresión en el complejo estatal. No se ha practicado ninguna detención en relación con esta agresión que, según parece, se debió a que el juez Chikwanha había rechazado una petición que le presentó el Estado para que ordenase el ingreso en prisión preventiva de cinco oficiales del Movimiento por el Cambio Democrático (*Movement for Democratic Change, MDC*) que habían sido acusados, junto con otras dos personas, de incendiar dos tractores de propiedad estatal en Chipinge. Tras quedar en libertad, los cinco hombres habían sido nuevamente detenidos, pero el juez Chikwanha se negó a ordenar su ingreso en prisión

preventiva alegando que no había pruebas suficientes para justificar su privación de libertad.

El 26 de agosto, apenas transcurrida una semana de la agresión perpetrada contra el juez Chikwanha, Godfrey Gwaka, juez del distrito de Zaka, en la provincia de Masvingo, fue apuñalado en el centro de servicios de Zaka. Se sospecha que la agresión guarda relación con los fallos dictados recientemente por el juez Gwaka concernientes a los partidos políticos. En la actualidad el juez Gwaka está recibiendo atención médica hospitalaria en Zaka.

«La reciente detención de la doctora Lovemore, el ataque con bomba contra la oficina de la Voz del Pueblo y los ataques perpetrados contra jueces son prueba de la existencia de una campaña de represión de quienes critican al gobierno conforme se aproxima la fecha prevista para las elecciones en septiembre», ha manifestado Amnistía Internacional.

«Los ataques dirigidos contra los jueces ponen de manifiesto los intentos constantes por parte de las autoridades gubernamentales y de las “milicias”, respaldadas por el Estado, de debilitar el sistema judicial e impedir a los funcionarios de los órganos jurisdiccionales que ejerzan su función de forma imparcial y profesional», ha añadido la organización.

Información general

A través de su trabajo con las víctimas de la tortura, la Fundación Amani Trust ha ayudado a mujeres víctimas de violación. Las circunstancias que rodearon a estas violaciones y otros abusos sexuales revelan que estos ataques obedecían a motivos políticos. Amnistía Internacional, en su informe publicado en junio de 2002 titulado *ZIMBABWE: The toll of impunity* (AFR 46/034/2002), expresaba especial preocupación por el creciente número de denuncias de violación y de otras formas de tortura de carácter sexual cometidas por «milicias», a las que el Estado apoya.

En el citado informe se documentaba también el debilitamiento al que el gobierno estaba sometiendo a la judicatura, desobedeciendo abiertamente aquellas resoluciones dictadas por el Tribunal Superior que contradecían la política gubernamental y poniendo en marcha una campaña de acoso contra jueces y magistrados que se desempeñaban sus funciones de forma imparcial y profesional.

En el informe, Amnistía Internacional pedía la derogación de las leyes que no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos, tales como la Ley de Orden Público y Seguridad y la Ley de Acceso a la Información y Protección de la Intimidad. Estas leyes, promulgadas en enero y en marzo de 2002 respectivamente, han sido utilizadas por las autoridades zimbabuenses para restringir las libertades civiles, especialmente las de expresión y de reunión, y para crear un clima negativo en lo que respecta a los derechos humanos.

Documento público

Si desean más información pónganse en contacto con la oficina de prensa en Londres

llamando al número + 44 20 7413 5566, o visiten <<http://news.amnesty.org>>. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten las páginas web de EDAI en <<http://www.edai.org/centro/news.html>>.